

Santiago, once de octubre de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

Por sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-995-2022, se resolvió rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la demandada y rechazar la demanda interpuesta por don Mauricio Rodríguez Ossa en contra de la Municipalidad de Las Condes, omitiéndose pronunciamiento respecto de la excepción de prescripción, sin costas.

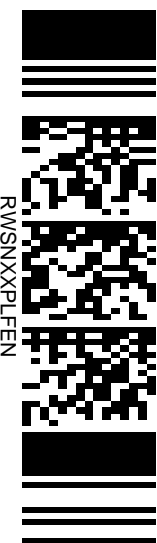
Contra ese fallo, la parte demandante dedujo recurso de nulidad invocando, de manera subsidiaria, las siguientes causales: 1) la prevista en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, en relación con lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 459 del mismo cuerpo legal; 2) la contemplada en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, por existir una calificación jurídica errónea de los hechos acreditados; y, finalmente se invoca, 3) la causal contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, en relación con lo dispuesto en el artículo 1° del mismo, el artículo 4° de la ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, además de los artículos 7° y 8° inciso 1° del código del ramo.

Se solicita se anule la sentencia en razón de las causales invocadas, manteniendo lo resuelto respecto a la excepción de incompetencia absoluta, y dictando la correspondiente sentencia de reemplazo, acogiendo íntegramente la demanda, reconociendo la existencia de la relación laboral, declarando injustificado el despido, otorgando en consecuencia, todas las prestaciones e indemnizaciones solicitadas, incluidas las cotizaciones previsionales durante el periodo que duró la relación laboral, además de la sanción dispuesta en el artículo 162, inciso 5° y 7° del Código del Trabajo, con costas.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista.

**Considerando:**

**Primero:** Que el recurrente funda la primera causal de su recurso de nulidad, invocando como se ha dicho el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo en relación con lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 459 del mismo código, argumentando que el fallo impugnado no



recoge ni considera en su integridad toda la prueba rendida, ya que solo se limita a señalar el tiempo en que se prestaron los servicios, haciendo referencia a los contratos a honorarios y decretos alcaldicios, sin profundizar en el contenido de estos y las funciones realizadas, por lo que, a su juicio, existe un abismo jurídico racional al determinar los hechos acreditados que corresponderían, según el fallo, a un cometido específico.

Arguye, adicionalmente que, el tribunal del grado solo enunció de manera nominal los documentos incorporados, no valorando el mérito de estos, los que darían cuenta de la existencia de una jefatura, jornada de trabajo, pago de una contraprestación mensual y periódica, rendición de cuenta, derecho a reembolsos, obligaciones contraídas, permisos, identidad con la empresa, entre otras.

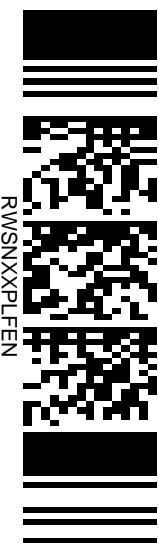
**Segundo:** Que de manera subsidiaria, ha invocado la causal del artículo 478 letra c), por incurrir la sentencia impugnada en una calificación jurídica errónea de las labores contratadas y desarrolladas por el actor, como cometidos específicos, sin atender a lo que jurisprudencialmente se ha entendido para definir dicho concepto, citando el recurrente fallos que estima se encuentran relacionados.

Previa referencia a las labores que habría desempeñado el actor, sostiene que la forma en que se desarrollaron las tareas torna en imposible su calificación como específicas, toda vez que las mismas no son perfectamente distinguibles y determinadas, se ejecutaron de manera continua, en calidad de “labores menores” o administrativas.

Adiciona que las labores implicaban una infinidad de actos que no se agotaban en sí mismos, sin delimitación en el mismo contrato, pudiendo ser ejecutados en distintos momentos, lugares y tiempos, sin especificidad.

**Tercero:** Que, finalmente, se ha invocado la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, en relación con lo dispuesto en el artículo 1º del Código del Trabajo y el artículo 4º de la Ley N°18.883 sobre Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, además de los artículos 7º y 8º inciso 1º del Código del ramo.

Arguye el recurrente que la acertada interpretación de la normativa que denuncia infringida está dada por su vigencia respecto de las



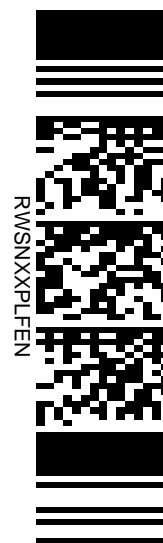
personas naturales contratadas por la Administración del Estado de las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo, pues aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírsele el estatuto especial que regula a la entidad contratante, se han desempeñado, en la realidad, en las condiciones de subordinación y dependencia.

Sostiene que la sentencia incurre en infracción de ley, toda vez que no existe en el caso de autos una ejecución de labores no habituales, accidentales y que conste de cometidos específicos, sino que, por el contrario, conforme al principio de primacía de la realidad y el mérito de la prueba incorporada, se debió haber dado por establecido el imperio legal de la contra excepción que contiene el artículo 1º del Código del Trabajo.

**Cuarto:** Que en lo que toca al primer motivo de nulidad invocado, la causal que concede el recurso está contemplada en la letra e) del artículo 478 del Código del Trabajo, conforme a cuyo tenor: “El recurso de nulidad procederá, además: e) cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 o 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue”, la que debe relacionarse, según el recurrente, con el N°4 del artículo 459 del Código del Trabajo, esto es, aquella norma que señala que la sentencia definitiva debe contener “El análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación”.

**Quinto:** Que, conforme a la hipótesis de la invalidación en análisis, el legislador exige del sentenciador que éste exponga en el fallo, luego de analizar las pruebas rendidas en el juicio, las razones que, en definitiva, lo llevaron a una determinada conclusión. Así, se debe exteriorizar el proceso interno que hace el fallador, en forma razonada y coherente, a fin de permitir el control de las decisiones judiciales dentro del proceso.

Como correlato de lo anterior, la causal invocada requiere, para ser acogida, los siguientes requisitos: a) que el recurrente singularice cuáles fueron los medios de prueba omitidos; b) que el sentenciador



efectivamente haya omitido el análisis de determinados medios de prueba en su sentencia; y c) que esa omisión influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

**Sexto:** Que, según se lee de la sentencia impugnada y contrariamente a lo aseverado por el recurrente, la juez de la causa ha efectuado la ponderación probatoria de todos los antecedentes de convicción pertinentes, haciéndose especialmente cargo de la prueba aportada en el considerando octavo, dando cuenta de un ejercicio de racionamiento lógico conclusivo suficientemente inteligible, al consignar *“(...) Tanto este contrato como el anterior dejan establecido que entre sus funciones a la municipalidad le compete el desarrollo comunitario y la asistencia social a través de las cuales busca mejorar las condiciones de vida de sus habitantes labor que ejecuta con cargo a sus respectivos programas que anualmente se ponen en vigencia asignándoseles un presupuesto determinado para su ejecución, el que debe coincidir con cada ejercicio presupuestario y como no solo se requiere de recursos materiales sino también humanos , elemento esencial para la consecución de los fines propuestos y su ejecución por tratarse de labores no habituales o accidentales que se desarrollan, incluso en distintos días, horarios y lugares de la comuna y se requiere de su apoyo para el logro de los objetivos. Se reitera que el cometido es para Gestor Técnico Comunitario, imputándolo a Prestaciones Servicios Comunitarios N° 002 Honorarios Programas Recreacionales, siendo el honorario mensual correspondiente de \$830.572.- El vínculo que relaciona a las partes se rige por este contrato y el programa y queda de cargo del profesional. Que por otra parte fueron también incorporadas las boletas de honorarios emitidas por don Mauricio Andrés Rodríguez Ossa, quien mantiene el giro “Servicios de Asesoramiento y Representación Jurídica” y quien ostenta profesión de abogado; N° 365 de mayo de 2020, 366 del mismo mes, 391 de agosto de 2020, 417 del mismo mes, 369 del mismo mes, N° 396 de diciembre de, N° 425 de 20 de diciembre de 2021, 376 de enero de 2020, 398 de enero de 2021, 381 de febrero de 2020, 388 de 20 de junio de 2020, 387 de mayo de 2020, N°421 de 20 de octubre de 2021, 416 de julio de 2021, 390 del mismo mes, N°368 de 20 de julio de 2019, N°415 de 20 de junio de 2021; N° 367 de junio de 2019, N° 386*



de abril de 2020, N° 401 de 20 de marzo de 2021, 410 de mayo de 2021, 405 de abril de 2021, 399 de febrero de 2021, N° 375 de 20 de diciembre de 2019.”-

**Séptimo:** Que, según fluye de lo precedentemente razonado, queda en evidencia que el recurso se limita a discrepar de la apreciación de la prueba contenida en el fallo, sin compartir el raciocinio valorativo asentado en el motivo noveno del fallo en examen,

Así, la juez a quo ha ejercido, en forma razonada y coherente, una facultad privativa que la ley no le concede al recurrente, por lo que el recurso no podrá prosperar bajo esta causal.

**Octavo:** Que, en lo que toca a la segunda causal de nulidad impetrada, cabe precisar que ésta, para prosperar, debe considerar la observancia de un requisito esencial, dado por la inamovilidad de los hechos asentados en el fallo. Así lo ordena la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo, cuando requiere mantener inalterables “las conclusiones fácticas del tribunal inferior”, lo que también se exige en la causal genérica de infracción de ley del artículo 477 del Código del Ramo, que se invoca como último motivo subsidiario de invalidación, debiendo siempre mantenerse irrestricto apego al sustrato fáctico determinado en la sentencia.

**Noveno:** Que, como se advierte del escrito de formalización del recurso en examen, contrastado con el fallo de la juez del grado, ninguno de los hechos que se dicen en el arbitrio se encuentran establecidos en la sentencia, pues, por el contrario, en este sentido, la juez de base, después de hacerse cargo de las estipulaciones de los contratos a honorarios suscritos por las partes, sostuvo, en el considerando noveno, al razonarse: *“Que de lo expuesto, emana que los contrato de prestación de servicios que fueron suscritos entre la Municipalidad y el demandante, dejan constancia que se rigen por las normas del propio contrato, no otorga la calidad de funcionario público y no genera vínculo de subordinación y dependencia, de lo cual se concluye que el régimen jurídico que regula a estos contratantes queda bajo las normas contenidas en el Código Civil.”*; agregando, en lo pertinente, *“... todos los decretos que autorizan la contratación, hacen alusión a un cometido específico y por un tiempo determinado, estableciéndose en cada*



*decreto un plazo de vigencia, todo lo cual es conocido del demandante, quien concurrió voluntariamente a su suscripción, conociendo que además, en estas circunstancias, era posible que la Municipalidad contratante podía ponerle término en cualquier momento, si estimare que sus servicios ya no eran requeridos Por otro lado, se advierte que las boletas de honorarios no son correlativas, lo que significa que el demandante no necesariamente prestaba servicios exclusivos para la Municipalidad y de manera permanente, siendo conocido que la profesión de abogado, es de aquellas profesiones liberales, que puede ser ejercida prestando servicios para varias personas a la vez, por tanto, el hecho de desempeñarse como tal para la municipalidad bajo la modalidad de honorarios no le impide continuar ejerciendo su profesión en forma externa a la municipalidad, lo que si le estaría vedado si se tratare de un cargo de planta no se puede desconocer que estas contrataciones han sido efectuadas por una Municipalidad, cuyo estatuto legal es la Ley 18.695, Orgánica de Municipalidades, que considera que el ingreso, deberes, derechos y responsabilidad administrativas y así también la cesación de funciones del personal municipal, se regirá por el Estatuto Administrativo de funcionarios municipales...Que entonces, no es posible establecer que se trata de servicios permanentes y continuos, sino al contrario, solo han sido accidentales y para cometidos específicos (sic)".*

**Décimo:** Que, en consecuencia, ninguna de las hipótesis fácticas necesarias para construir la nulidad que se pretende es posible encontrarla en el fallo que se cuestiona, pues no existe ningún hecho que permita sostener que la relación que unió a las partes se encuadra en la descripción del artículo 7° del Código del Trabajo, lo que evidencia que este fue construido con total desapego a al sustrato factual de la decisión, lo que impone su rechazo.

**Undécimo:** Que, finalmente y en lo que toca a la última causal de nulidad invocada y en estrecha vinculación con el motivo de invalidación precedentemente rechazado, la resolución del caso propuesto consiste en determinar si la contratación a honorarios del actor se enmarca o no en las prescripciones del artículo 4° de la Ley N°18.883, ya que, si ello no



fuera así, sólo entonces pueden tener cabida las prescripciones del Código del Trabajo.

**Duodécimo:** Que, según dispone el artículo 4° de la Ley N°18.883: *“Podrán (sic) contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.*

*Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.*

*Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”*

**Décimo Tercero:** Que, conforme a lo recién transcrito, en el ámbito de las municipalidades las contrataciones a honorarios pueden tener lugar en las hipótesis siguientes: 1.- Cuando deban realizarse labores accidentales, que no sean las habituales de la institución; 2.- Cuando se trate de contratar a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera; y 3.- Cuando la contratación lo sea *“para cometidos específicos”*.

**Décimo Cuarto:** Que, en lo pertinente, la ley no ha precisado lo que debe entenderse por “accidental” ni “específico”, motivo por el que cabe asumir estos términos de acuerdo con su uso general o frecuente. Entre las acepciones de “accidental” está la siguiente: *“...3. Dícese del cargo que se desempeña con carácter provisional o interino...”*. A su vez, “provisional” es aquello *“que se hace, se halla o se tiene temporalmente”*. Lo anterior, da cuenta de algo transitorio y excepcional, condición que se ve reafirmada por la propia norma legal cuando supedita ese tipo de contratación al hecho que no puede tratarse de labores “habituales” de la institución. Por su parte, “específico” designa lo concreto, lo preciso, lo determinado.

**Décimo Quinto:** Que, de acuerdo con lo asentado en autos, es dable concluir que tal clase de prestación de servicios, básicamente por



su carácter “específico”, enfocada en la asesoría jurídica, en carácter de “*Gestor Técnico Comunitario, imputándolo a Prestaciones Servicios Comunitarios N° 002 Honorarios Programas Recreacionales*”, no puede entenderse que forme parte de las actividades “habituales” del órgano, es dable concluir que la contratación del actor se ajustó a la hipótesis que prevé el inciso segundo del citado artículo 4°. Debe concluirse entonces que el fallo impugnado ha hecho una correcta calificación jurídica de los hechos y una acertada aplicación del derecho, lo que impone el rechazo de este último motivo de nulidad.

Por estas consideraciones, el recurso no podrá prosperar bajo ninguna de las causales subsidiarias bajo las cuales ha sido propuesto, debiendo ser desestimado en todas sus partes.

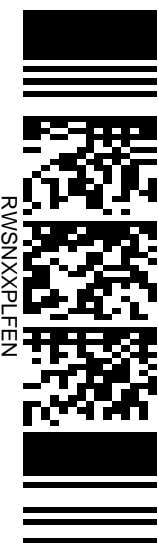
Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 456, 479, 481 y 482, todos del Código del Trabajo, **se rechaza**, sin costas, el recurso de nulidad deducido contra la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, dictada por el Primer Juzgado de Letras de Santiago, en los autos RIT O-995-2022, la que, en consecuencia, no es nula.

**Regístrese y comuníquese.**

Redacción de la Ministra Carolina Brengi Zunino.

No firma la Ministra (s) señora Villegas, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por haber cesado funciones de suplencia en esta Corte.

**N° Laboral-Cobranza 97-2023.**





Pronunciado por la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Carolina S. Brengi Z. y Ministra Suplente Maria Teresa Quiroz A. Santiago, once de octubre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a once de octubre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

